
Elecciones y conflicto en Colombia*

Los candidatos presidenciales y sus posiciones frente al conflicto

Elections and conflict in Colombia.

Presidential candidates and their positions toward the conflict.

Javier Duque Daza

Resumen

El presente artículo, al abordar las elecciones presidenciales de Colombia del 2006, analiza las posiciones de los diferentes candidatos presidenciales respecto al conflicto armado colombiano, el cual involucra tanto a grupos de extrema izquierda como a grupos paramilitares de extrema derecha. Además, incluye la presentación de las propuestas de los candidatos respecto al origen y características del conflicto y las estrategias más adecuadas para resolverlo.

Palabras clave: Conflicto, elecciones, Estado.

Summary

In discussing the presidential elections in Colombia in the year 2006, the present article analyzes the positions of the different presidential candidates regarding the armed conflict in Colombia, which involves groups of the extreme left as well as paramilitary

groups of the extreme right. Also, it includes the presentation of the proposals of the candidates regarding the origin and characteristics of the conflict and the most appropriate strategies to solve it.

Key words: Conflict, elections, State government.

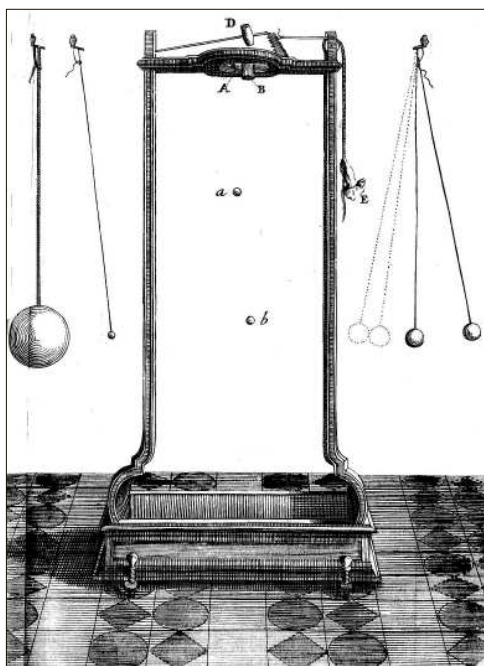
Introducción

Colombia es uno de los países de América Latina con mayor tradición electoral. De igual forma, cuenta con la *guerrilla más antigua del mundo*. A partir de estos dos componentes, en las últimas cuatro décadas se ha configurado una *difícil combinación*: presencia continuada de actores armados ilegales y mantenimiento de los procedimientos legales de legitimación del poder político. Esta combinación ha hecho de Colombia un caso especial de un *país con conflicto armado, pero con elecciones regulares*.

La presencia de actores armados ilegales le han dado un tinte especial a las elecciones

* Este artículo fue elaborado gracias a la contribución del Programa Regional de Becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). El trabajo forma parte de los resultados del Proyecto "Colombia: subinstitucionalización organizativa del bipartidismo y emergencia de alternativas políticas" que fue premiado con una beca de investigación en el Concurso "Partidos, movimientos y alternativas políticas en América Latina y el Caribe", programa de becas CLACSO-ASDI de promoción de la investigación social, convocado en el 2005 en el marco del Programa de Becas CLACSO-Asdi para investigadores semisenior de América Latina y el Caribe.

y el conflicto ha constituido un tema central de las campañas. En el proceso electoral de 2006, el conflicto volvió a ser protagonista y, frente a él, los candidatos se alinearon en dos posiciones opuestas. Una *posición dura*, con base en la premisa según la cual una paz duradera sólo es posible si se obtiene cuando una de las partes en conflicto ha sido derrotada o debilitada, de tal forma que se vea obligada a negociar. Esta posición define a los grupos guerrilleros como grupos terroristas y despolitiza el conflicto, lo cual conduce a que su posible solución sea ganar la guerra derrotando a los actores armados, o forzándolos a entrar en negociaciones de paz. Se



trata de realizar acciones de contención y presencia militar que los persuada. Una *posición blanda*, que expresa iniciativas de diálogo con el oponente, reconociendo sus posiciones y fortalezas, así como los factores sociales y políticos que explican su existencia en el país. La solución del conflicto pasa por el diálogo y la negociación. Una paz duradera es posible si se logra a través de una negociación fundada en concesiones mutuas entre los actores en conflicto.

En las elecciones, la *posición dura* la representó el presidente Álvaro Uribe Vélez, candidato de una coalición que incluyó al tradicional Partido Conservador que, por segunda ocasión consecutiva, no postuló un candidato propio, y una multiplicidad de fuerzas políticas dispersas que habían obtenido escaños en el Congreso de la República en las elecciones realizadas dos meses antes de las presidenciales. Los partidos agrupados en torno a la candidatura fueron Cambio Radical, Apertura Liberal, Huella Ciudadana, Colombia Democrática, Colombia Viva, Partido Social de Unidad Nacional, Movimiento de Avanzada Social Alas-Equipo Colombia, Convergencia Ciudadana y Conservatismo Independiente,

así como algunos grupos de minorías religiosas como el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA).

En consonancia con su acción gubernamental, durante el cuatrienio 2002-2006, este candidato reiteró su intención de mantener el enfrentamiento con la insurgencia, calificada como terrorista. Durante la campaña manifestó la disposición a dialogar con los actores armados después de su debilitamiento militar. La negociación sólo sería posible con el cese al fuego. Frente a los partidos opositores su planteamiento fue formulado en términos dicotómicos, especialmente frente a los candidatos más proclives a la negociación, a los cuales calificó de *amigos del terrorismo*. Al respecto señaló: “el país va a tener que escoger ahora si vamos a seguir por el mejoramiento de la Seguridad Democrática como camino a la paz, o vamos a retroceder para que con el comunismo disfrazado le entregue la patria a la FARC” (*El Tiempo*, mayo 8 2006).

La *posición blanda* fue expresada por los otros cuatro candidatos que registraban en las encuestas: Horacio Serpa Uribe, del Partido Liberal; Carlos Gaviria, del nuevo partido Polo Democrático Alternativo, que integró a diversas fuerzas de izquierda que venían siendo agrupadas por los partidos Alternativa Democrática y Polo Democrático Independiente; Álvaro Leyva Durán, del Movimiento Nacional de Reconciliación y Antanas Mockus, del Partido Visionario, con el aval de la Alianza Social Indígena. La posición de estos candidatos fue la de buscar la solución política negociada del conflicto frente a lo que consideran una opción guerrillera y militarista del presidente y candidato Uribe Vélez.

En ambas posiciones subyacen concepciones diferentes de la acción estatal respecto a la acción militar y de la autoridad pública. Como lo ha señalado Álvaro Guzmán (2004), en la *Política de Seguridad Democrática* existe una concepción del Estado como aparato que hace, en principio, presencia armada, domina sobre un territorio y la población y sólo, posteriormente, establece formas de investigación y administra justicia. La intervención armada del Estado aparece como prioridad. Por su parte, las posiciones

proclives a la solución negociada, además de la importancia asignada a la dimensión coactiva propia de cualquier Estado, dan relevancia a la conexión de ésta con la cohesión social que se expresa en la presencia del Estado en la solución de problemas que se consideran asociados a la presencia de la insurgencia, problemas de exclusión social y económica. En tal sentido, se reconoce de forma explícita que en Colombia el Estado no ha logrado imponer el monopolio del uso de la fuerza, pero tampoco ha contribuido a garantizar de forma efectiva los derechos sociales y económicos de la población.

Posiciones de los candidatos respecto al conflicto armado

El presente texto presenta una sucinta descripción de las posiciones de los cinco candidatos presidenciales respecto al conflicto armado. Éstas son abordadas en cuatro dimensiones: la caracterización del conflicto, la determinación de sus causas, las posiciones respecto a su solución y las estrategias propuestas para lograrlo. De igual forma, el artículo plantea los componentes centrales del escenario postelectoral, las posiciones del candidato ganador y del principal actor armado del país respecto a las posibilidades de un futuro proceso de paz.

Los candidatos y sus posiciones respecto al conflicto armado

Movimiento Primero Colombia, Álvaro Uribe Vélez: combatir la amenaza terrorista

En la campaña de las elecciones presidenciales del 2002, el entonces candidato

disidente del Partido Liberal, Álvaro Uribe Vélez, planteó en su programa denominado "Manifiesto Democrático":

A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal [...].

Un conflicto de la magnitud del nuestro necesita de soluciones atípicas. Demandamos la cooperación internacional porque este conflicto se financia con el narcotráfico, negocio criminal internacional, y se apoya en armas fabricadas afuera [...].

Soy amigo del diálogo con los violentos, pero no para que crezcan sino para hacer la paz. Pediré mediación internacional para buscar el diálogo con los grupos violentos, siempre que empiece con abandono del terrorismo y cese de hostilidades. Para el desarme y la desmovilización puede haber todo el plazo que se requiera. Urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para los acuerdos finales. Toda la generosidad en la reinserción. Garantías efectivas para el ejercicio político de quienes provengan de los grupos armados [...] La agenda temática de la democracia no se debe negociar bajo la presión de los fusiles, pero a quienes los portan se debe ofrecer condiciones para que los abandonen y hagan valer sus ideas en los escenarios de la democracia [...].

Este planteamiento del candidato, respecto a los grupos insurgentes, sintetiza en gran medida su posición respecto al conflicto armado en Colombia. Como tesis central, la asimilación de las guerrillas con el terrorismo,

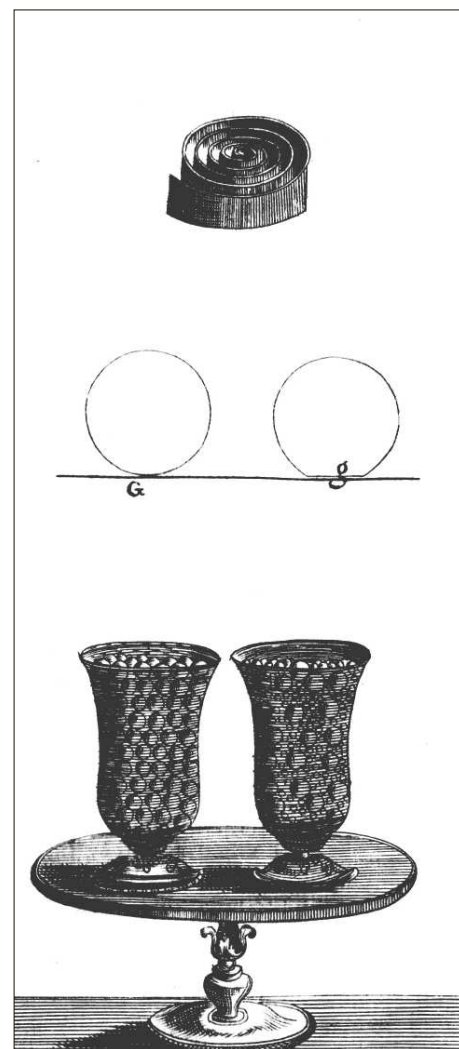
Posiciones de los candidatos respecto al conflicto armado

POSICIÓN DURA
Negociación, previo
debilitamiento militar

POSICIÓN BLANDA
Solución política
negociada

← Álvaro Uribe Vélez

→ Horacio Serpa Uribe, Carlos Gaviria,
Álvaro Leyva Durán, Antanas Mockus



está acompañada de otros tres planteamientos centrales: i) como grupos terroristas, las guerrillas tienen motivaciones de índole económicas vinculadas al narcotráfico; ii) luchan contra la democracia y contra la sociedad, y, iii) frente a ellas, la única opción de derrotarlos, o debilitarlos para conducirlos a una negociación. Esto último bajo la convicción de que una paz duradera sólo es posible cuando el opositor ha sido derrotado o ha sido obligado a negociar.¹

Esta posición fue planteada inicialmente en la campaña presidencial del 2002 y fue enunciada en la *Política de Seguridad Democrática*, sustentada en la premisa según la cual la seguridad constituía el principal problema del país. Como implementación de esta política, una vez posesionado el Presidente, las primeras medidas fueron el decreto de Estado de conmoción interior (con lo cual se amplió el poder de las fuerzas militares para adelantar funciones de policía judicial), la creación de un impuesto para la seguridad nacional, el reclutamiento de soldados campesinos, la conformación de redes de informantes, el estímulo a la desertión de los combatientes de los grupos guerrilleros y la creación de zonas de rehabilitación en áreas de influencia de las guerrillas (Galindo, 2004).

La implementación de la *Política de Seguridad Democrática* ha estado fundada en la tesis según la cual en Colombia no existe conflicto armado, sino una amenaza terrorista, con lo cual se redefinió a los grupos armados ilegales: éstos pasaron de ser *grupos irregulares armados, o grupos violentos, a ser grupos terroristas*.² A la vez que se recalificaba a las guerrillas y se asumían acciones orientadas a su derrota militar, se iniciaron negociaciones que conducirían a acuerdos de desmovilización y reinserción de los miembros de los grupos paramilitares. Estos últimos también fueron recalificados: pasaron de ser *delincuentes armados a delincuentes políticos*, con lo cual se asumió que éstos se orientaban a derrumbar el orden institucional establecido. De delincuentes organizados, los paramilitares pasaron a ser considerados actores políticos, lo cual pretendía darles estatus y legitimidad social

previa a las polémicas negociaciones de paz que posteriormente se llevarían a cabo.

La tesis de la inexistencia de conflicto armado en el país la sustentaba el Presidente con base en el argumento según el cual, en sus orígenes en la década del sesenta, las guerrillas luchaban contra la exclusión política generada por el Frente Nacional, en lo cual encontraban la justificación a sus acciones. Con el desmonte del régimen de coalición y los consiguientes cambios institucionales, las aperturas democráticas y las garantías para la oposición establecidas en la última década, la lucha guerrillera se habría quedado sin fundamentos y habría devenido en una acción armada con fines privados, sustentada en la economía del narcotráfico. El conflicto armado, que expresaría el enfrentamiento entre el Estado y un actor armado ilegal que reivindicaba frente a éste un proyecto de sociedad diferente, se habría transformado en una *amenaza terrorista* contra toda la sociedad, afectada por las diversas acciones de secuestros, asesinatos, chantajes y destrucción de la infraestructura del país.

Concebida de esta forma la situación interna y los actores armados ilegales, la consecuente perspectiva de acción desde el poder fue la de enfrentar y confrontar, antes que persuadir y negociar. Tal como lo planteó en su programa de gobierno en el 2002, en las elecciones del 2006 Álvaro Uribe Vélez anunció que la única opción frente a los actores armados era una política encaminada a debilitarlos para que se vieran obligados a entrar en negociaciones: *disuadir la guerra con acciones de contención que conduzcan a la negociación*. De ello se desprendería, en primer lugar, que no era posible un acuerdo humanitario solicitado por diversos sectores sociales como salida a los centenares de retenidos por las guerrillas; en segundo lugar, que no era viable establecer una zona de despeje solicitada por las FARC como posibilidad de inicio de negociaciones, pues, en ocasiones anteriores, esta figura había sido utilizada para delinquir y para crear una *zona de oxígeno* para el fortalecimiento guerrillero, y, en tercer lugar, que el diálogo sólo era posible si había cese de acciones militares y desmovilización por parte de los

1. Podemos ilustrar esta posición con un pasaje de una de las intervenciones públicas del presidente: "aquí hay que persistir, perseverar, ¡que es lo que le ha faltado a Colombia! Y el Gobierno tiene que dar ejemplo de compromiso para derrotarlos. Ellos solamente van a negociar el día que sientan que de verdad los podemos derrotar. Aunque lo disimulen. Es posible que con otro Gobierno digan: 'sí negociamos', porque ya sienten una debilidad proveniente del anterior que los obliga a negociar, así digan que negocian por simpatía con el nuevo" (intervención de Álvaro Uribe Vélez en el Foro de la Universidad de La Sabana en Bogotá "Amenaza terrorista o conflicto armado", abril 26, 2005).

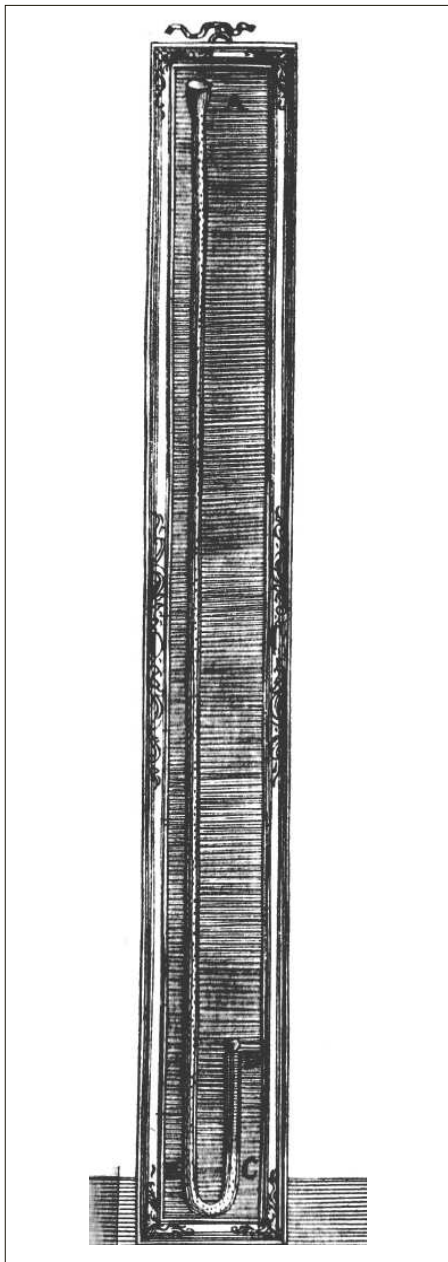
2. La recalificación de los grupos guerrilleros como grupos terroristas ya había sido planteada, entre otros, por el ex presidente Alfonso López Michelsen quien se había referido a estos grupos armados como bandas terroristas. (El Espectador, Bogotá, julio 9 1999).

grupos armados. Bajo las premisas anteriores, el candidato justificó la *Política de Seguridad Democrática* a través de la cual se orientó a garantizar que el terrorismo fuera derrotado y el Estado pudiera hacer presencia en todo el territorio nacional.³ Aunque no se cerraba la posibilidad de diálogo, ésta requería como condiciones el cese de hostilidades y la mediación internacional. Así mismo, que se depusieran las pretensiones de establecer reformas sociales y económicas por fuera de lo que consideraba “mecanismos de la democracia, sin la presencia de los fusiles”.

El propio presidente Uribe Vélez calificó su propuesta como una *posición dura* frente a los grupos, por él denominados, terroristas: “yo he sido partidario de una acción fuerte para que las nuevas generaciones puedan vivir tranquilas en este país y dejar de seguir consintiendo a estos bandidos, pero, al mismo tiempo, soy tan convencido de esa acción de seguridad y de autoridad como de la necesidad de profundizar la democracia. Y cuando eso se ve en la práctica... el atentado contra la democracia no tiene sino un calificativo, que es terrorismo” (Exposición del presidente Álvaro Uribe en el foro ¿Amenaza terrorista o conflicto interno?, realizado en la Universidad de La Sabana, Bogotá, mayo de 2005).

Aunque en algunos momentos, durante su gobierno y en la campaña electoral del 2006, esta posición radical pareció matizarse,⁴ el presidente insistió en la tesis de *debilitar para negociar*, en cuya dirección reivindicó el proceso de negociación realizado con los grupos paramilitares, considerando que éste fue posible sólo con su debilitamiento militar.⁵

En la práctica, durante el cuatrienio 2002-2006, el gobierno se movió en tres direcciones. Por una parte, anunció una victoria militar sobre las FARC con base en la implementación del *Plan Patriotas* y una prolífica campaña de invitación y de incentivos para los desertores, en la cual contó con el apoyo abierto de Estados Unidos, partiendo de la premisa de que se estaría dando la extinción del grupo guerrillero a causa de su debilitamiento ocasionado por la acción



estatal. Por otra parte, estableció un proceso de negociación con los grupos paramilitares que ha llevado a la desmovilización de más de 30.000 miembros de estos grupos (31.689 integrantes entre el 15 de diciembre del 2005 y el 15 de agosto del 2006, pertenecientes a 38 grupos reconocidos durante el proceso como autodefensas o paramilitares) y un intento de concederle legitimidad social a un actor armado vinculado a múltiples asesinatos, masacre y apropiación violenta de propiedades en muchas zonas rurales del país. En tercer lugar, inició conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, el grupo

3. Su programa presidencial planteó al respecto: “para proteger a la sociedad y la democracia colombianas de los ataques terroristas de una insurgencia que ha preferido fortalecerse con los capitales del narcotráfico antes que con el respaldo popular. Política de seguridad para llevar la autoridad del Estado a todos los rincones del país y evitar los ataques de los grupos armados a los civiles y el imperio de las bandas de narcotraficantes en asocio con estos grupos armados. Política de seguridad democrática con el propósito de garantizar el ejercicio de las libertades de pensamiento, locomoción y empresa para todos los colombianos. Política de seguridad dirigida a combatir simultáneamente el terrorismo, el paramilitarismo y el narcotráfico” (Manifiesto Democrático. Los 100 puntos de Uribe). Argumento reiterado por el vicepresidente Francisco Santos con motivo de una intervención en Londres: “política de seguridad para proteger a la sociedad y la democracia colombianas de los ataques terroristas de una insurgencia que ha preferido fortalecerse con los capitales del narcotráfico antes que con el respaldo popular. Política de seguridad para llevar la autoridad del Estado a todos los rincones del país y evitar los ataques de los grupos armados a los civiles y el imperio de las bandas de narcotraficantes en asocio con estos grupos armados” (Instalación de la conferencia “Colombia’s unfinished battles: armed conflict and narco trafficking”. London School of Economics and Political Science. 13 de marzo, 2004).

4. A comienzos del 2005, el Presidente planteó, respecto a las Farc: “les hemos propuesto urgencia para el cese de hostilidades, como condición para empezar un proceso de negociación, sin que haya urgencia para el desarme, para la desmovilización. Creo que es una propuesta práctica, generosa, que concilia o explica cómo una política cuyo polo determinante es la Seguridad Democrática, es una política que no se cierra a la negociación (Exposición del presidente Álvaro Uribe en el foro ¿Amenaza terrorista o conflicto interno?, realizado en la Universidad de La Sabana, Bogotá, mayo de 2005).

5. Al respecto planteó: “las autodefensas ilegales de Colombia no han llegado a este proceso de negociación por mera liberalidad. La acción militar de este Gobierno ha sido implacable y ha tenido un efecto determinante en que unos sectores de las autodefensas tengan voluntad de negociar hoy [...]. Por eso he dicho: en Colombia hay un problema social muy grave que tenemos que resolver, pero la acción de los violentos no la podemos enmarcar ni definir como una acción dentro de un conflicto armado interno. Es una amenaza terrorista contra un Estado que está profundizando la democracia

pluralista” (Exposición del presidente Álvaro Uribe en el foro ¿Amenaza terrorista o conflicto interno?, realizado en la Universidad de La Sabana, Bogotá, mayo de 2005).

6. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, durante los años 2003-2005, 982 miembros del ELN se habrían desmovilizado, y entre el 2002 y el 2005, este grupo guerrillero habría disminuido sus efectivos en más de 2.000 miembros, de un estimado de 3.655 combatientes. Así mismo, habría perdido control territorial y presentarían una disminución de su acción militar. De acuerdo con el gobierno, esto sería el producto de la Política de Seguridad Democrática. Frente a la tesis del debilitamiento del ELN el informe es más cauto y plantea la necesidad de tener en cuenta cuatro factores importantes: i) no se conoce el número verdadero de guerrilleros muertos, dado que el grupo guerrillero se lleva a sus muertos y heridos, por lo cual el registro existente no es exacto; ii) el número de desmovilizados y desertores es controvertido por el ELN, señalando su manipulación; iii) muchos de los detenidos han sido dejados en libertad por falta de pruebas (Hechos del Callejón, Boletín No. 5 junio 2005, PNUD).

7. Los previos acercamientos del ELN a los gobiernos se han dado en las conversaciones de Cravo Norte (1991), Caracas y Tlaxcala, como miembros de la Coordinadora Simón Bolívar (1991-1992), el preacuerdo de Viana, España (1998); en el Encuentro de Puerta del Cielo en Maguncia, Alemania (1998); en Costa Rica (2000) y La Habana (2002 y 2002). A mediados del 2004 se reanudaron los acercamientos con el gobierno de Álvaro Uribe y el líder guerrillero Francisco Galán fue autorizado a asistir e intervenir en el “Foro Internacional Minas Antipersonales y Acuerdos Humanitarios” realizado en el Congreso de la República. En éste propuso un acuerdo humanitario, una amnistía general para los presos políticos y un cese al fuego bilateral. En diciembre de 2006, el ELN y el gobierno anunciaron que estaban en prenegociaciones y se concretó la iniciativa Casa de Paz, consistente en que el gobierno le permite al ELN adelantar consultas con diversos sectores de la sociedad para ir creando un ambiente de negociación y diálogo, para ello el gobierno le permitió a Francisco Galán salir durante un tiempo de la cárcel para realizar estas actividades (ver al respecto, Zuluaga, 2006). Este grupo guerrillero ha planteado que existen diversos obstáculos a las negociaciones de paz con el gobierno de Álvaro Uribe, derivados de su concepción respecto al conflicto y a su manejo. Considera que

guerrillero que más se ha debilitado en los últimos años⁶ y que ha sido protagonista de varios intentos frustrados de negociaciones de paz.⁷

A dos semanas de finalizar la campaña, el candidato planteó un cambio en su posición respecto al despeje de una zona, señalando que si las Farc demostraban intención de diálogo y cese de hostilidades, estaba dispuesto a establecer una zona de ubicación con veeduría internacional (*El Tiempo*, mayo 16 2006). De igual forma, planteó que si ganaba las elecciones en la primera intervención pública le haría una invitación a este grupo guerrillero con la perspectiva de iniciar negociaciones (Entrevista, *Revista Dineros*, mayo 2006).

Los planteamientos del presidente-candidato, no obstante sus matices y las posiciones de las últimas semanas de la campaña electoral, condujeron a un punto muerto con las FARC, que plantearon abiertamente que con Uribe Vélez no había posibilidades de paz y que estaban dispuestas a buscarla con un gobierno distinto.⁸

los obstáculos principales son: i) la insistencia en negar las causas sociales, económicas y políticas que originaron el conflicto, ii) pretender que la paz es un asunto entre la insurgencia y el gobierno, negando que la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos, y, en esa medida, un proceso de paz debe contar con la participación activa de los diversos sectores de la sociedad, iii) negar que el conflicto ha producido una profunda crisis humanitaria en los sectores más empobrecidos de la sociedad y que requiere ser atendida con prioridad, a la par que se trabaja por la solución política, iv) la negación que hace el actual gobierno de la existencia del conflicto interno, y, v) la falsa negociación del gobierno con los paramilitares, pues nunca existió una guerra entre ellos, siempre ha habido cooperación y coordinación. (*El Tiempo*, septiembre 7, 2005).

8. Las FARC expresaron en un comunicado de febrero del 2006: “es imposible el diálogo con este gobierno mientras persista en su estrategia mediática de calificar a la insurgencia como narcoterrorista y mientras siga criminalizando la protesta y la inconformidad popular. Colombia necesita y merece la paz, pero Uribe representa todo lo contrario: es guerra irracional y es incendio del país, olvido de los programas sociales, entrega de nuestra soberanía a los gringos, impuestos y más impuestos, ganancias para las empresas y pobreza para los colombianos. Lo que está en juego en estas elecciones es el futuro de Colombia, la reconciliación y reconstrucción del país en paz, la posibilidad

El Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe: diálogo y paz integral

En las elecciones del 2006 Horacio Serpa Uribe presentó por tercera ocasión su candidatura por el Partido Liberal. En las dos anteriores había sido derrotado por el candidato del Partido Conservador, Andrés Pastrana, en 1998, y en el 2002, por el candidato disidente liberal Álvaro Uribe Vélez. En ambos casos, miembros del Partido Liberal apoyaron al candidato opositor, muchos de ellos terminaron por retirarse del liberalismo y crearon sus propios partidos, o se adhirieron a algunas de las etiquetas existentes o recientemente creadas, generándose así una reducción sustancial del Partido Liberal por escisiones.

De igual forma que en las elecciones anteriores, y luego de haber hecho parte del gobierno como embajador de Colombia ante la OEA, el candidato liberal implementó una campaña orientada a tomar distancia de las posiciones del presidente-candidato. Serpa Uribe planteó cuatro puntos cen-

de los cambios estructurales represados por tantos años, la justicia social, la soberanía y la democracia verdadera. En todo esto debemos pensar los colombianos de cara a los comicios electorales que se avecinan.” (www.farcep.org/novedades/comunicados/sec2006). Posteriormente Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC, reiteró esta posición al señalar: “reiteramos que con Uribe no habrá intercambio, ni habrá diálogos. El Gobierno de Uribe es ilegítimo, no da ninguna credibilidad ni a las FARC ni al pueblo colombiano. Estamos dispuestos al Acuerdo Humanitario y a dialogar en búsqueda de la paz con un gobierno distinto al de Álvaro Uribe. Hemos escuchado propuestas, muy interesantes como las del candidato de la Reconciliación Nacional, Álvaro Leyva, que dice que parará la guerra en seis meses. Queremos que eso se logre, sería un respiro muy grande para el pueblo colombiano, del cual las FARC es una parte importante. Que va a hacer el Acuerdo Humanitario, nos parece perfecto. El candidato Carlos Gaviria, en otras palabras, ha señalado lo mismo. Esperemos que estos dos candidatos logren en algún momento unificar sus propuestas en beneficio de la paz uno de los principales intereses de nuestro pueblo, y en defensa de la soberanía nacional para que no hayan más extradiciones de colombianos a ninguna parte del mundo, y para que se empiece a reconstruir la nueva Colombia, golpeada por la corrupción, el clientelismo, las mentiras y el engaño que ha hecho Álvaro Uribe Vélez”. www.anncol.org/es/site/doc2006.

trales respecto al conflicto armado en el país: i) reconocer que en Colombia existía un conflicto social y armado, ii) ubicar las causas de éste en las condiciones sociales y económicas que han generado pobreza del país, iii) reorientar las negociaciones con los grupos paramilitares, las cuales no han sido transparentes y han conducido a fortalecer su poder económico y su presencia en diversos ámbitos de la sociedad colombiana durante el último gobierno, y, iv) propiciar una salida negociada del conflicto, antecedida por el acuerdo humanitario.

Para el candidato del Partido Liberal, el reconocimiento de la existencia del conflicto pasaba por asumir que éste se origina en situaciones sociales y económicas. De igual forma, que en la campaña presidencial del 2002⁹ el candidato Serpa consideró que “el hambre, la pobreza y la exclusión social están en las raíces de la violencia”. Aunque reconoce que la economía del narcotráfico había constituido un importante recurso de sostenimiento de las guerrillas,¹⁰ atribuyó una cierta base social a éstas, con lo cual tomó distancia de la definición del conflicto y de la caracterización que Álvaro Uribe hacía de las guerrillas.

Frente a las posibles soluciones del conflicto, propuso una política de diálogo, lo cual implicaba el fortalecimiento de la presencia del Estado en todo el territorio; la generación de reformas sociales y una revisión del modelo económico al cual atribuía la inequidad social y la creación de espacios para el diálogo con la insurgencia que condujeran a una negociación política del conflicto. En esta dirección, al asignarle al conflicto armado causas sociales, su programa fue denominado *propuesta de paz integral*, que, en su parecer, combinaba seguridad ciudadana, autoridad del Estado, negociación y reformas sociales.¹¹ El acuerdo humanitario, orientado a la liberación de los secuestrados, sería el primer paso hacia el diálogo con los alzados en armas, el cual no estaría condicionado a su desarme ni a su desmovilización.

En su propuesta, Horacio Serpa Uribe planteó que le daría continuidad a la política de seguridad, al proceso de negociaciones

con los paramilitares y al fortalecimiento de la presencia del Estado en todo el territorio nacional, implementadas por el gobierno de Uribe Vélez. No obstante, también expresó diferencias. Respecto a lo primero, enfatizó en la necesidad de garantizar los derechos sociales, la oferta de oportunidades de desarrollo, y ofrecer programas sociales. En lo segundo, continuar con el proceso, pero combatiendo a quienes no se desmovilicen, desmontando sus estructuras locales de poder. En cuanto al tercer aspecto, expresó la necesidad de medidas complementarias, como la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con aplicación por convenios con los gobiernos departamentales y locales; el establecimiento de una policía local, sin armas, para servicios de protección comunitaria; el impulso de una cultura de la convivencia y la legalidad; el control de la armas sin licencia; la creación de políticas de movilidad y adecuada administración y manejo del espacio público; la utilización de nuevas tecnologías para combatir la delincuencia y el aseguramiento del control de la fuerza pública de la red vial nacional (www.terra.com.co/elecciones_2006/reportaje).

Su propuesta de solución del conflicto involucra también como componentes importantes la reparación colectiva a las víctimas del conflicto, la restitución de sus bienes y el derecho a la verdad, así como el establecimiento de programas especiales de resocialización y la reestructuración de los programas de reinserción, para que se cumpliera el objetivo de recuperar la normalidad de la vida ciudadana. Además de la presencia militar del Estado, se enunció en este programa la necesidad de asumir otras dimensiones de los problemas asociados al conflicto que trascendían la intervención armada.

El Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria: negociación política y vigencia del Estado de Derecho

“No somos extremistas, ni guerrilleros, ni enemigos de la democracia y del Estado Social de Derecho. Por el contrario, somos demócratas, defensores del Estado

9. Para entonces expresaba: “para el Compromiso Social no habrá camino cierto hacia la paz si no se adelanta una reforma política, económica y social que combata la desigualdad y la pobreza, combinada con acciones dirigidas a recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y a fortalecer la justicia como instrumento de convivencia. No habrá paz sin justicia social. Siempre consideraremos la salida política como la mejor y menos costosa solución para el conflicto armado, pero mientras no estén dadas las condiciones para una negociación fructífera, cumpliremos con el deber de proteger la vida y la seguridad de los colombianos, en el marco de las facultades que le concede la Constitución Nacional y con el uso legítimo de la fuerza, enfrentando a guerrilleros y paramilitares, así como a todas las amenazas armadas que atentan contra la estabilidad del Estado” (www.elcolombiano.com/proyectos/series2006).

10. En el discurso de lanzamiento de su campaña planteó: “Colombia está agobiada por la acción de organizaciones criminales. El conflicto interno se financia, en gran escala, con negocios ilícitos. La guerrilla y los paramilitares son grandes administradores de la economía criminal, ya sea para impulsar sus objetivos militares o para el enriquecimiento de sus miembros” (www.partidoliberal.org.co/2006).

11. Al respecto, señaló en una reciente entrevista: “del lado de la autoridad, del lado de la fuerza pública, con políticas sociales, desarrollando una lucha contra la desigualdad, impulsando un nuevo modelo de desarrollo, creamos condiciones para hacer una negociación. Yo sigo reivindicando la posibilidad de la negociación. Eso que estuvimos una vez haciendo, Tlaxcala, hay que repetirlo, por supuesto, en mejores condiciones, hay que quitarle a la guerrilla la idea de que se puede tomar el poder por medio de las armas, eso me parece muy importante, pero ofrecer circunstancias de crecimiento social” (El Tiempo, marzo 8 de 2006).

Social de Derecho y pretendemos con esta propuesta fundamentar e impulsar, sin sectarismos pero sin ambigüedades, una alternativa de izquierda democrática en el país que encarne la verdadera oposición al modelo y gobierno actuales”.

Este planteamiento, incluido en el programa de gobierno de la campaña de Carlos Gaviria, del Polo Democrático Alternativo, tenía el carácter de una declaración de principios de un partido surgido por agregación de una gran diversidad de pequeños partidos de izquierda y centro-izquierda, desde el Partido Comunista y el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario -Moir-, los dos partidos de más vieja data dentro de la izquierda, hasta los movimientos que emergieron de procesos de paz entre las guerrillas y el Estado en los noventa, pasando por la Alianza Nacional Popular, nuevas agrupaciones de izquierda y algunos movimientos políticos independientes.

Como declaración de principios, se orientaba a contrarrestar cualquier intento de ubicación del partido y del candidato en un extremo del prisma político que pudiera conducir a identificarlos como simpatizantes de los grupos armados o enemigos de la democracia y del Estado de Derecho.¹²

El programa del *Polo Democrático Alternativo* respecto al conflicto se orientó en una dirección opuesta a la del candidato Uribe Vélez y expresó mucha proximidad con la del candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe.

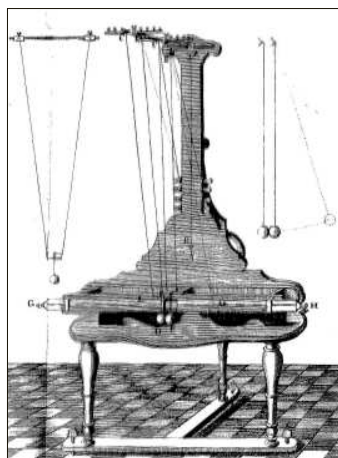
La propuesta partía de reconocer la existencia del conflicto social y armado en el país entre grupos insurgentes al margen de la ley y el Estado, a partir de causas sociales, económicas y políticas,¹³ frente a lo cual plantea que sólo mediante la negociación política era posible enfrentarlo. Con el horizonte de la construcción de lo que denomina *Un acuerdo*

nacional de Paz, su propuesta involucraba cuatro componentes: i) exigir a los grupos armados el respeto de la población civil, del medio ambiente y del patrimonio público; ii) generar un acuerdo humanitario, el cual constituiría un ejercicio previo para acuerdos de mayor alcance; iii) convocar a diversos actores sociales y a los partidos políticos para construir colectivamente una política de diálogo con los grupos al margen de la ley; y iv) abordar el problema a través de una mesa de negociaciones, la cual podría conducir el despeje de algunas zonas del país para avanzar en el proceso.

En términos similares a los planteados por Horacio Serpa Uribe, el candidato Carlos Gaviria planteó la necesidad de una política integral de paz que incluyera soluciones a las causas del conflicto, la negociación política con las organizaciones armadas y garantizar la plena vigencia del Estado Social de Derecho. Esto implicaba una concepción del Estado en el manejo de la política de seguridad que trascendía también su dimensión armada. La propuesta de paz del *Polo Democrático Alternativo* estuvo ligada

a la necesidad de implementación de reformas que permitieran superar las condiciones de exclusión imperantes en el país.

En el breve plazo, el candidato proponía continuar los diálogos con el ELN, para concretar compromisos y acuerdos humanitarios, así como las condiciones para la realización de la Convención Nacional y la firma de un pacto de paz definitivo. Con las Farc se realizaría el intercambio humanitario y se exploraría la posibilidad de lograr, antes del 7 de agosto de 2010, un pacto irreversible que pusiera fin a la confrontación armada. Buscaría, así mismo, el acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas para adelantar el proceso.¹⁴ Respecto a los grupos paramilitares, partiendo del diagnóstico de falta de transparencia y de impunidad en el



12. En diversas ocasiones, el candidato Carlos Gaviria planteó su distancia respecto a cualquier forma de acción política contraria a la deliberación, a la democracia y al Estado de Derecho. En una reciente entrevista manifestó al respecto: “uno de los grandes obstáculos que ha encontrado la izquierda es la guerrilla, porque cuando uno dice que es de izquierda lo vinculan con la lucha armada. Es muy importante que la gente se saque de la cabeza que toda propuesta de izquierda tiene que ver con el uso de las armas. Lo he dicho en todos los foros. Ni la ética que yo profeso, ni las convicciones filosóficas que tengo, son compatibles con la lucha armada... Si hay gente en el Polo que cree que la lucha armada es la vía, se equivocaron al señalarme como candidato.” (Revista Semana No 1249, abril de 2006). De igual forma, en el programa de campaña se señala: “nos oponemos a la guerra y al ejercicio de la violencia como instrumento de acción política. Reconocemos la naturaleza política de la insurgencia colombiana, pero consideramos que hoy la vía de la transformación es la lucha de masas democrática y pacífica. Repudiamos todas las formas de terror y de terrorismo de Estado, en particular el atentado personal, el secuestro, la extorsión, las acciones armadas contra la población civil que en modo alguno son formas legítimas de la lucha de los pueblos, por lo que condenamos todo acto de esta naturaleza”. (Documento: “Carlos Gaviria presidente. Polo Democrático Alternativo. Construyamos democracia, no más desigualdad. 2005).

13. En el programa se expresó: “a diferencia del gobierno actual, reconocemos, en primer lugar, la existencia del conflicto armado en el país, originado en la desigualdad, la exclusión, la negación de las libertades, la represión de la protesta social y la violación de los derechos humanos. Si bien en algunas ocasiones dicho conflicto ha asumido formas terroristas por parte de sus distintos actores, no es correcto negarlo y reducir todo el problema a la confrontación del terrorismo” (Programa de gobierno, Carlos Gaviria Presidente, 2006: 8).

14. Documento: “Carlos Gaviria Presidente. Polo Democrático Alternativo. Construyamos democracia, no más desigualdad”. 2005.

proceso adelantado por el gobierno, planteaba el desmonte de todas sus estructuras económicas y de poder y de sus actividades criminales.¹⁵

Por sus características de coalición de sectores de centro-izquierda e izquierda, algunos de los cuales habían reivindicado en el pasado la tesis de la “combinación de todas las formas de lucha”, el discurso del candidato del *Polo Democrático Alternativo* enfatizó el respeto a la democracia, al Estado Social de Derecho y la condena a las formas violentas de acción política. De igual forma, contrapuso al discurso confrontacional del presidente, una propuesta de diálogo y negociación. En ambos sentidos se orientó a atraer electores que se opusieran a la *posición dura* frente al conflicto identificando su propuesta como de *izquierda democrática*. A partir del rechazo al uso de la violencia y con base en el fundamento pluralista y no sectario de su propuesta, planteó la lucha por la democracia y la superación de la exclusión social.

Movimiento Nacional de Reconciliación, Álvaro Leyva: en seis meses para la guerra

En el lanzamiento de su campaña presidencial, el candidato Álvaro Leyva Durán, quien en el pasado había sido congresista por el Partido Conservador y había participado en la Asamblea Nacional Constituyente, en 1991, en la lista del movimiento Alianza Democrática M-19, planteó una frase orientada a generar un fuerte impacto: “*en seis meses para la guerra*”. El candidato reivindicó como su gran fortaleza para ser presidente el conocimiento de los actores en conflicto, producto de su participación en diversos procesos de paz, en acciones de intermediación en la entrega de secuestrados y el haber estado en contacto directo con los grupos guerrilleros, especialmente con las Farc.

“Armado” con su experiencia que consideraba fundamental para solucionar el conflicto colombiano, este candidato esbozó como punto de partida el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado y la necesidad de alcanzar la paz negociada. Consideró que las Farc debían ser definidas como un grupo alzado en armas, por fuera

de la Constitución y las leyes, que tenía un control territorial, una organización y cierto apoyo social, por lo cual no era adecuado calificarlas como grupo terrorista (*El Espectador*, marzo 26, 2006). Este candidato planteó que las causas del conflicto armado se encontraban en la debilidad del Estado: “en un Estado irresponsable, permisivo, que había permitido que las autodefensas nacieran y se multiplicaran, que, además, había facilitado la concentración de la propiedad y todas las problemáticas y consecuencias que de ello se derivaban”. Desde esta posición, al reconocer la debilidad del Estado como factor causal del conflicto, la solución pasaba por la negociación, respecto a lo cual señaló: “al proceder así, se acepta la participación del Estado, su connivencia y responsabilidad en las circunstancias de guerra que vivimos. Es decir, se actúa como Estado responsable, mostrando la disposición para conocer, afrontar y transformar las causas del conflicto, lo cual permitirá atacar la problemática que se vive sin ingerencia externa” (Entrevista Álvaro Leyva Durán www.voltairenet.org, com 2006).

No obstante el reconocimiento del estatus político concedido a los grupos guerrilleros y sus relativos acercamientos a las Farc en diversas negociaciones, para el candidato la lucha armada no constituía ninguna opción viable para los grupos insurgentes y propuso la resolución negociada del conflicto. En oposición a la política del gobierno, Álvaro Leyva expresó la necesidad de un acuerdo humanitario, como punto de inicio a las conversaciones, seguido de un alto al fuego para que las partes pudieran iniciar un proceso de negociación, el cual constaría de mesas de trabajo, estaría bajo su dirección personal e incluiría la realización de una convención nacional que unificara los diversos procesos con los actores armados. Respecto a los grupos paramilitares propuso evitar la impunidad, establecer acciones de reparación a las víctimas y mecanismos de resocialización de los desmovilizados.

Álvaro Leyva renunció a su candidatura dos semanas antes de la realización de las elecciones, argumentando falta de garantías por parte del gobierno.¹⁶

15. Sobre lo cual planteó: “Pondremos en práctica una política de superación y desmonte total y definitivo del paramilitarismo, tanto de sus estructuras armadas, como de sus redes de apoyo económico, actividades criminales, presiones y chantajes políticos y sociales, y control ilícito de territorios. Se definirá un marco legal de verdad y justicia que recupere la verdad histórica, reivindique la memoria, supere la impunidad, garantice una reparación económica, política, cultural y moral a las víctimas y reconozca la responsabilidad estatal cuando fuere pertinente”. (Documento: “Carlos Gaviria Presidente. Polo Democrático Alternativo. Construyamos democracia, no más desigualdad”. 2005.

16. El candidato señaló que en la campaña había desigualdad frente al presidente y candidato Álvaro Uribe Vélez y peligro para su persona pues había sido hostigado por las fuerzas armadas del Estado durante su campaña (El Tiempo, mayo 14 2006).

Alianza Social Indígena, Antanas Mockus: autorregulación social y solución del conflicto

Antanas Mockus, ex rector de la Universidad Nacional, dos veces alcalde de Bogotá y quien se había presentado como candidato a la vicepresidencia en 1998, en unión con Noemí Sanín Posada, por el movimiento *Sí Colombia*, presentó su candidatura con el aval de la Alianza Social Indígena, movimiento que desde 1991 cuenta con personería jurídica y que, por tener representación en el Congreso de la República, la mantuvo después de la reforma política del 2003.¹⁷

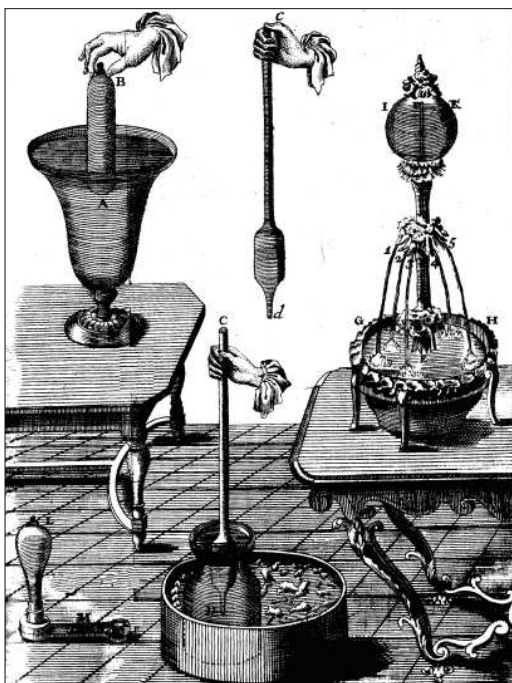
La posición de Antanas Mockus respecto al conflicto tuvo en común, con los candidatos del Partido Liberal, del Polo Democrático Alternativo y de Reconciliación Nacional, la propuesta de buscar la negociación del conflicto. No obstante, a diferencia de todos los candidatos, introdujo como componente central en su propuesta la necesidad de la acción de la sociedad civil,

que permitiera establecer dispositivos de sanción moral y de movilizaciones en contra de las acciones violentas. La propuesta giró en torno a lo que el candidato denominó *autorregulación social*, lo cual presuponía que el Estado asumiera la responsabilidad de desarrollar las obligaciones constitucionales en materia de seguridad en cuatro aspectos fundamentales: seguridad ciudadana, jurídica, social y nacional, pero, también, a un compromiso de la población respecto al reconocimiento del otro y a la censura contra quienes actúen en contra de la sociedad (Partido Visionario, programa de gobierno:

“Colombia legal, justa y productiva”. Febrero 2, 2006 <http://partidovisionario.com/articulo>).

En cuanto al primer aspecto, expresó la necesidad de consolidar la presencia del Estado, para que fuera “capaz de combatir las amenazas a la democracia provenientes del narcotráfico, los grupos armados al margen de la ley, la corrupción, el clientelismo y la presión indebida de intereses privados” y, a su vez, incentivara y apoyara las acciones ciudadanas de resistencia civil promovidas por la población. Aquí expresó una combinación de elementos que no fueron planteados por los otros candidatos, la acción estatal, en

conjunción con la acción social: “comprender el conflicto armado como una amenaza contra la seguridad nacional exige mantener la acción de la fuerza pública y propiciar acciones pacíficas como la resistencia civil, la presión social y la participación de los grupos armados ilegales en el debate público sobre las consecuencias de los actos violentos y del ‘todo vale’.



El candidato Mockus invitó a la población a hacer uso del espacio de lo público para deliberar, discutir, a partir de lo cual consideraba que se podrían abrir las puertas a la negociación. Pero, también, en una propuesta un poco singular, que apostaba por el diálogo en todos los niveles a “motivar a la sociedad y a los parientes de los paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros a disuadirlos mediante razones y sentimientos, y educar a la ciudadanía en las consecuencias dañinas que, para la sociedad y el Estado, tienen los servicios ilegales de protección” (Partido Visionario, programa de gobierno: “Colombia

17. Aunque en el año 2000, Antanas Mockus había creado el partido Movimiento Visionario, éste no había obtenido personería jurídica al no cumplir con el requisito legal de entonces, consistente en el respaldo de al menos 50.000 firmas, por ello no podía presentarse como candidato de este movimiento. Mediante el Acto Legislativo No 1 del 2003 se estableció que el Consejo Nacional Electoral reconocería personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Éstos podrían obtenerlas con votación no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas corporaciones públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno. Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos. Mediante la Ley 996 del 2005 se reglamentó el Acto legislativo No 1 del 2003 y se estableció que la inscripción de un candidato por parte de un movimiento social o un grupo significativo de ciudadanos requería del respaldo de un número de firmas equivalente al 3% del número total de votos válidos depositados en las anteriores elecciones presidenciales.

legal, justa y productiva". Febrero 2 de 2006 <http://partidovisionario.com/articulo>).

Su programa incluyó cuatro aspectos centrales: i) promocionar el abandono de las actividades ilegales por la vía de la valoración de la vida; ii) promover acciones de resistencia civil a la confrontación violenta, en alianza con organizaciones de defensa de derechos humanos y promoción de la paz.; iii) desarrollar las obligaciones constitucionales en materia de seguridad en sus cuatro aspectos fundamentales: seguridad ciudadana, jurídica, social y nacional, y iv) contener el uso del terror para prevenir nuevos desplazamientos y atender de manera integral a la población desplazada. "Proteger y restituir las tierras abandonadas por las comunidades campesinas, indígenas y negras en situación de desplazamiento".

Respecto a los paramilitares, planteó la necesidad de superar la laxitud del proceso y evitar la impunidad a que había conducido el proceso adelantado por el presidente Uribe Vélez.

Los escenarios electoral y pos-electoral

Las elecciones

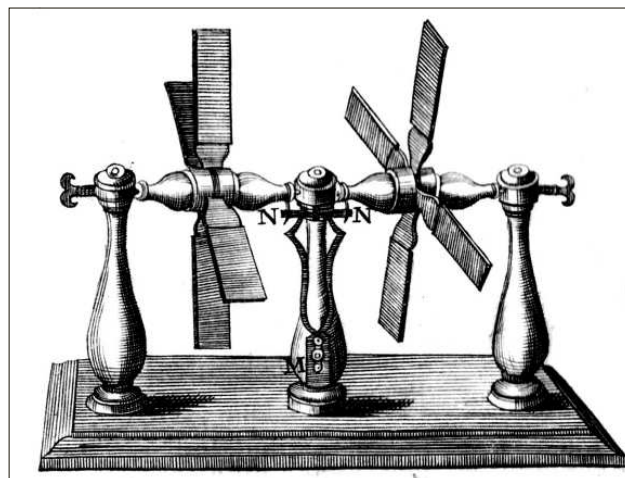
La *difícil combinación* de actores armados ilegales y procedimientos legales de legitimación del poder político a la cual hacíamos alusión al comienzo del artículo, sigue constituyendo el telón de fondo de los procesos electorales en Colombia. Como expresión de esta coexistencia que hace del país un escenario turbulento en el cual, no obstante, se mantiene la periodicidad de las elecciones competitivas, el tema del conflicto siempre adquiere protagonismo en las campañas electorales. Con mayor o menor énfasis, las propuestas de solución del conflicto armado han estado presentes en todos los programas y en todas las campañas en las últimas tres elecciones presidenciales.

Los resultados de las elecciones de 1998 y de 2002 tuvieron como factor importante, de incidencia en los resultados, las posiciones frente al conflicto. En las pri-

meras, el acercamiento del candidato Andrés Pastrana a las Farc y la promesa de una posible negociación, y un consecuente proceso de paz, jugaron a favor del candidato que finalmente ganó las elecciones, aunque en la primera vuelta había sido derrotado por el candidato liberal Horacio Serpa Uribe. En el 2002, la posición de *mano dura* enarbolada por el candidato Álvaro Uribe Vélez, como elemento central de su campaña, coadyuvó a su triunfo en la primera vuelta. En ambos casos, el principal derrotado fue Horacio Serpa Uribe.

En el 2006, después de dos periodos gubernamentales en los cuales ni se logró la paz, ni se derrotó a los grupos guerrilleros, el escenario electoral presentó, de nuevo, la polarización de las posiciones respecto al conflicto armado. Se reeditó el enfrentamiento entre los candidatos Horacio Serpa y Álvaro Uribe Vélez, con un tercer candidato, Carlos Gaviria, muy cercano al primero en sus planteamientos. En estas elecciones la polarización respecto al conflicto se presentó en un escenario electoral que contó con un *elemento nuevo* de tipo institucional: la reelección presidencial inmediata, con la cual se presentó una situación inédita en Colombia de un presidente que, a la vez, era candidato y contaba con mayoría absoluta en el Congreso de la República. El escenario contó también con un *elemento viejo*: la negativa de las Farc a iniciar cualquier proceso de paz con el candidato que contaba con mayores probabilidades de éxito, Álvaro Uribe Vélez.

Varios factores jugaron a favor del candidato de *Primero Colombia*. Por una parte, de igual forma que en las elecciones del año 2002, la mayoría de partidos y movimientos con representación en el Congreso de la República apoyaron su candidatura: 72 de los 102 senadores y 125 de 166 representantes a la Cámara, manifestaron públicamente su adhesión al candidato Uribe Vélez.¹⁸ Dentro de estos apoyos estaban incluidos los partidos conformados por congresistas que tras la



18. De los escaños de la Cámara, los que apoyaron al candidato Álvaro Uribe Vélez fueron: 29 del Partido Conservador, 29 del Partido de la Unidad Nacional, 21 de Cambio Radical, 8 de Alas-Equipo Colombia; 8 de Convergencia Ciudadana; 5 de Apertura Liberal; 4 del Movimiento de Integración Regional; 2 del Movimiento Nacional, 2 de Por el País que Soñamos, 2 del Movimiento Popular Unido; 2 de Colombia Democrática; 2 del Nuevo Liberalismo; 1 del Movimiento Nacional Progresista; 1 del Movimiento de Salvación Nacional; 1 del Movimiento de Participación Popular; 1 del Movimiento MIRA; 1 del Movimiento MORAL y 1 del Movimiento de Acción Social. El Partido Liberal estuvo apoyado por 35 representantes y el Polo Democrático Alternativo de 7. En cuanto al Senado, de los 102 escaños, 72 apoyaron a Uribe Vélez: 20 del partido de la Unidad Nacional; 18 del Partido Conservador; 15 de Cambio Radical; 7 de Convergencia Ciudadana; 5 de Alas-Equipo Colombia; 3 de Colombia Democrática; 2 del MIRA; 2 de Colombia Viva. El Partido Liberal recibió el apoyo de sus 18 senadores y el Polo Democrático Alternativo de sus 8 escaños y uno de las minorías indígenas.

19. En el proceso de escisiones y reagrupaciones de congresistas, tres movimientos políticos se vieron envueltos en acusaciones de vínculos con los grupos paramilitares. Colombia Viva nació en el 2003 como resultado de la reforma política. Inicialmente agrupó a 10 senadores. Aunque varios de ellos eran personajes desconocidos en la política, como el médico Dieb Maloof, todos fueron grandes electores en la Costa norte del país (los otros congresistas fueron Miguel de la Espriella, Habib Merheg, Luis Eduardo Vives, Jairo Enrique Merlano; Carlos García). En las elecciones locales de 2003 sacaron 444 concejales, 22 diputados y 27 alcaldes. Para las elecciones del 2006 el partido empezó a disolverse, pues sus miembros prefirieron unirse a proyectos que apoyaban al presidente y candidato Uribe Vélez. A finales del 2005, Dieb Maloof, Habib Merheg, Luis Eduardo Vives, Jairo Enrique Merlano y Carlos García abandonaron a Colombia Viva para irse al Partido Social de la Unidad Nacional. Unos meses después, en enero del 2006, fueron expulsados Maloof, Merheg y Vives por posibles vínculos con grupos paramilitares, por ello los dos primeros debieron regresar a Colombia Viva, por el cual participaron en las elecciones del 2006, el tercero se incorporó al partido Convergencia Ciudadana. También se integró al partido el congresista Vicente Blel, expulsado del Partido Liberal por presuntos vínculos con el narcotráfico, y Jorge de Jesús Castro, expulsado de Cambio Radical también por sus posibles vínculos con grupos paramilitares. De la Espriella se integró al partido Colombia Democrática. En las elecciones del 2006 la lista la encabezó el pastor cristiano Enrique Gómez. Lograron obtener dos curules en el senado, para Dieb Maloof y Habib Merheg. Estos dos últimos, junto con Vicente Blel, fueron detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia, a comienzos del año 2007, acusados de vínculos con el paramilitarismo y asociación para delinquir (El Tiempo, febrero 16 de 2007; Revista Semana No 1294, 2007).

20. Este partido es dirigido por Mario Uribe, congresista desde 1986 y primo del presidente Álvaro Uribe Vélez, con quien fundó en 1986 el Movimiento Democrático dentro del Partido Liberal, en el departamento de Antioquia. Este partido aceptó a congresistas acusados de vínculos con el paramilitarismo como Miguel de la Espriella y Álvaro García. También hicieron parte del partido otras dos representantes a la Cámara que aspiraban a ser reelegidas y que antes de las elecciones fueron retiradas por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. En las elecciones del 2006 obtuvo tres curules en el Senado y dos en la Cámara. De éstos, un senador y

acusación de vínculos con grupos paramilitares fueron rechazados por las agrupaciones políticas uribistas y decidieron asociarse bajo las etiquetas de *Colombia Viva*,¹⁹ *Colombia Democrática*²⁰ y *Convergencia Ciudadana*.²¹ En la dinámica de agregación electoral en Colombia, el candidato triunfante siempre ha sido quien logre construir una red de apoyos de parlamentarios más amplia que la de sus contendientes. Dada la alta personalización de la política y las estrategias centradas en la movilización de los electorados regionales por parte de campañas individuales de los congresistas (viejos o nuevos), la adhesión del mayor número de senadores y representantes a la Cámara, y de los candidatos que no obtienen escaños pero que aportan electores, es determinante en los resultados finales. Estos apoyos de la clase política regional y de sus partidos se encuentran entrelazados por un fuerte sentido pragmático y de intercambio clientelista, el cual ha constituido un elemento central de la política partidista en el país y que se reprodujo durante el periodo presidencial 2002-2006.²²

Por otra parte, el candidato enarboló, de igual forma que en su campaña del 2002, un

un representante fueron detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con grupos paramilitares (El Tiempo, febrero 16 de 2007; Revista Semana, No 1294, 2007; www.terra.com.co/elecciones2006/partidos/16-01-2006).

21. Este movimiento fue creado en 1997 por Luis Alberto Gil Castillo, ex militante del M-19 y dirigente sindical de los maestros en Santander. En 1991, Gil se retiró de la Alianza Democrática M-19 y un año después se lanzó como diputado a la Asamblea de Santander en representación de un movimiento independiente. En 1997, fue elegido nuevamente como diputado en Santander, esta vez por Convergencia Ciudadana. En ese mismo año, el movimiento avaló en una coalición con los partidos Liberal y Conservador, al candidato Miguel Jesús Arenas, quien finalmente ganó las elecciones para la gobernación de Santander. Esa fue la última vez que Convergencia Ciudadana apoyó a los partidos tradicionales del departamento. Desde entonces se convirtió en su principal opositor. Para las elecciones legislativas de 2002, el movimiento fue el único en ganar dos curules en la Cámara de Representantes en Santander. Gil Castillo fue elegido senador. En 2002, un grupo de ex militares encabezado por el ex coronel de la policía Hugo Aguilar, ex jefe del bloque de búsqueda que persiguió a las mafias del narcotráfico en los noventas, se unió a Convergencia Ciudadana. El movimiento ha sido denunciado por congresistas de ofrecer dinero a políticos de otros sectores para que hagan parte de sus listas y de tener vínculos con grupos paramilitares. Para las elecciones del 2006 este partido recibió al senador Carlos García expulsado del Partido de la Unidad Nacional por presuntos

discursos muy centrados en “la mano dura” en contra de los grupos armados y la recuperación del orden y la seguridad. Este discurso le permitió atraer a muchos sectores afectados por la violencia de vieja data en el país.

En tercer lugar, de igual forma que en las elecciones del 2002, el candidato orientó su discurso hacia el sector empresarial que lo había apoyado en su triunfo anterior y había respaldado el cambio institucional que reestableció la reelección presidencial.²³ Como lo ha planteado Francisco Gutiérrez (2006), con esta estrategia, “el uribismo ha estado asociado –y ha alimentado con entusiasmo– una veta patriótica muy cercana al sector privado que espera un *revival* colombiano (‘los buenos somos más’) del cual el Presidente sería el emblema” (Gutiérrez, 2006).²⁴

El candidato de *Primero Colombia* ganó las elecciones con el 62.3% de los votos (7.397.835 votos); la segunda votación correspondió al Polo Democrático Alternativo con el 22% (2.613.157 votos, el Partido Liberal obtuvo el 12.2% de los votos (1.404.235). Los otros candidatos obtuvieron menos del 3% de los votos.

vínculos con los grupos paramilitares. En las elecciones del 2006 obtuvo siete curules en el Senado y ocho en la Cámara. Posteriormente fue detenido por vínculos con los grupos paramilitares el senador Luis Eduardo Vives (Revista Semana, febrero 15 de 2007).

22. Ver: Álvaro Forero (2006) “La nueva cara de Uribe” en Revista Semana (Bogotá) No 1266; Daniel Coronell, (2006) “El manifiesto burocrático”, Revista Semana, No 1230, Bogotá, y (2006) “Lazos familiares”, Revista Semana No 1258, Bogotá.

23. En la campaña del 2002 contó con financiación de la industria cervecera (las cervecerías Unión, Bavaria, Leona y Malterías de Colombia), el conocido Sindicato Antioqueño hizo aportes a través de sus compañías cementeras y otras empresas del grupo como Almacenes Éxito, Compañía Nacional de Chocolates, Industrias Noel y el Banco de Colombia. En total, la campaña ‘Primero Colombia’ recaudó 15.607 millones de pesos (cerca de siete millones de dólares), la mayoría, de empresas privadas. ‘La Gata’, la polémica chancera del Bolívar, aportó 100 millones de pesos a su campaña a través del grupo Uniapuestas, bajo su control en ese momento (www.terra.com.co/elecciones_2006/reportaje/28-05-2006/nota286098.html).

24. Una encuesta preelectoral entre empresarios mostró que el 85.9% de éstos respondieron que se debería continuar con los programas del gobierno de Uribe Vélez, y el 62.4% planteó que si el presidente era reelegido el sector económico de sus negocios se beneficiarían (El Colombiano, junio 27 de 2005).

Los resultados representaron para el PDA un relativo éxito: obtuvo la más alta votación de la izquierda en toda su historia, superando al Partido Liberal. La unificación de los diversos grupos y movimientos de izquierda; el discurso moderado y su autodefinición como izquierda democrática a partir de la cual tomó distancia de las viejas tesis, de la combinación de todas las formas de lucha enarbolada en décadas anteriores por algunos sectores vinculados especialmente al Partido Comunista; la acción de sus parlamentarios que asumieron una fuerte oposición al gobierno en temas cruciales de la vida del país, y la candidatura del ex magistrado de la Corte Constitucional y senador Carlos Gaviria, con una amplia tradición como jurista y académico, constituyeron factores que coadyuvaron al amplio apoyo electoral que obtuvo el candidato del PDA. Por su parte, el Partido Liberal, del cual se separó un alto número de congresistas que crearon sus propios partidos o se incorporaron a otros, obtuvo su tercera derrota en cabeza de la candidatura de Horacio Serpa Uribe.

Los inicios del segundo mandato. El escenario pos-electoral

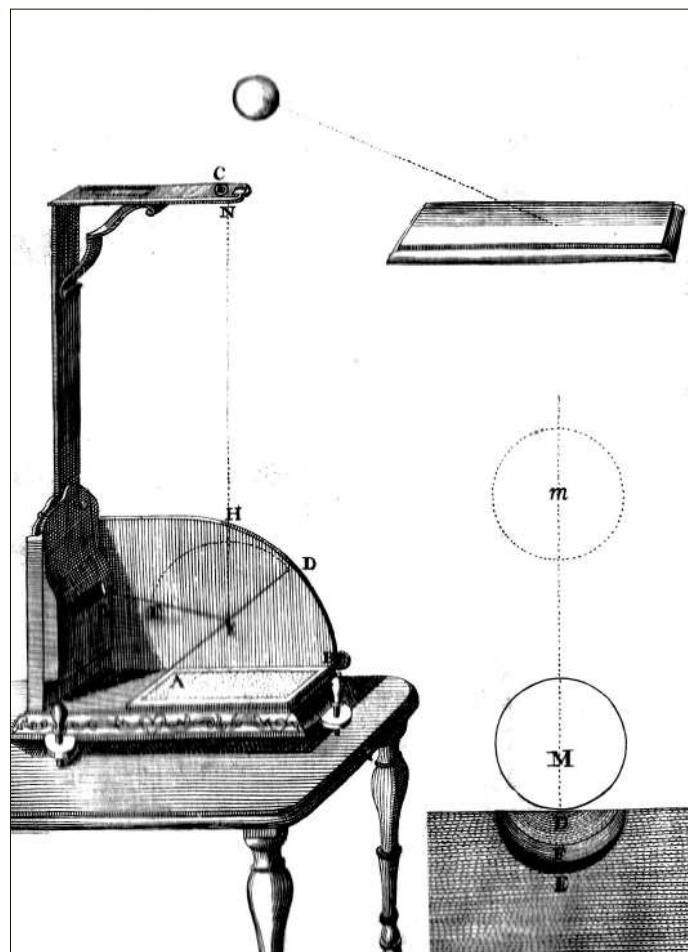
Después de las elecciones se presentaron algunos giros en los planteamientos por parte del Presidente reelecto y de las Farc respecto a un posible proceso de negociación; posteriormente, las posiciones han oscilado entre la radicalización y algunas propuestas de acercamiento, centradas en un posible acuerdo humanitario que permita la liberación de las personas secuestradas por las Farc y de algunos miembros de esta organización que se encuentran presos.

Después de las elecciones, el Presidente planteó en su discurso de posesión que estaba dispuesto a las negociaciones y al camino de búsqueda de la paz a través del diálogo. Este giro expresó el desplazamiento de una *posición dura* de negociación, previo debilitamiento, a la posibilidad de aproximaciones con quienes fueron denominados anteriormente como portadores de la *amenaza terrorista*. Retomando sus planteamientos

de la última etapa de la campaña electoral, el Presidente manifestó al respecto:

“Hemos vinculado todas nuestras energías, con severidad, al rescate de la seguridad. No dudaremos en entregarlas, todas nuestras energías, con generosidad, a la paz. Hemos insistido sin temor en nuestras acciones en procura de la seguridad. No nos frena el miedo para negociar la paz. Confieso que me preocupa algo diferente: el riesgo de no llegar a la paz y retroceder en seguridad. La paz necesita sinceridad. Por eso los hechos irreversibles de reconciliación deben ser el enlace entre seguridad y paz”.

Un aspecto central de este giro se expresó en el reconocimiento de la presencia de la subversión, de la debilidad del Estado para contrarrestarla y derrotarla y del surgimiento de otros actores armados que, a través de la ilegalidad, la han enfrentando: “la amarga experiencia de la combinación de ‘todas las formas de lucha’ por grupos ilegales, la debilidad institucional para enfrentarla y la reacción también violenta e ilegítima para contrarrestarla, configuran un cuadro clínico de la democracia y las libertades, en trance de solución, aún no definitiva”. El Presidente recurrió al ex candidato Álvaro Leyva Durán como posible contacto con el grupo armado, dado el acercamiento e interlocución que éste ha mantenido durante las dos últimas décadas con el grupo guerrillero. No obstante, insistió en la tesis del cese de hostilidades y planteó que el acuerdo humanitario se realizaría con



25. Discurso de posesión de Álvaro Uribe Vélez. Agosto 7 de 2006. Centro de Noticias del Estado, Presidencia de la República.

26. Las Farc siempre han insistido en que las negociaciones deben conducir a una serie de transformaciones en la sociedad colombiana en sus estructuras sociales, económicas y políticas. En los últimos años éstas han sido planteadas por el grupo guerrillero como una propuesta mínima y fueron formuladas en las mesas de negociaciones del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Los diez puntos de las FARC incluían: 1. Solución política al grave conflicto que vive el país; 2. La doctrina militar y de defensa nacional del Estado, será bolivariana. Las Fuerza Armadas serán garantes de nuestra soberanía nacional, respetuosas de los Derechos Humanos y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde con un país que no está en guerra con sus vecinos. La Policía Nacional volverá a ser dependiente del Ministerio de Gobierno, reestructurada para que cumpla su función preventiva; moralizada y educada en el respeto de los Derechos Humanos; 3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. Fortalecimiento de los instrumentos de fiscalización popular. El Parlamento será unicameral. La oposición y las minorías tendrán plenos derechos políticos y sociales garantizándoles, el Estado, su acceso a los grandes medios de comunicación. Habrá libertad de prensa. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y magistrados del país. Moralización de la Administración pública y de las instituciones civiles y militares del Estado; 4. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador en los sectores estratégicos. El énfasis de la política económica será la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la producción, a la pequeña, mediana y gran industria privada, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria. El Estado invertirá en áreas estratégicas de la industria nacional y desarrollará una política proteccionista sobre las mismas; 5. El 50% del Presupuesto nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al colombiano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado. El 10% del Presupuesto nacional, será invertido en la investigación científica; 6. Quiénes posean mayores riquezas, aportarán más altos impuestos para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, sólo

la intermediación de las Naciones Unidas y sin recurrir al despeje de zonas como los solicitaban las Farc.²⁵

Por su parte, las Farc también expresaron cierta apertura. Aunque en reiteradas ocasiones el grupo guerrillero expresó su negativa a cualquier negociación con el presidente Uribe Vélez y siempre ha condicionado una posible negociación a la realización de cambios estructurales en el país, en una posición maximalista.²⁶ En recientes declaraciones, Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las Farc, planteó una posición algo matizada al señalar: “valoramos toda gestión que se encamine en la búsqueda de la solución del conflicto por la vía política. Pero es el gobierno el que decide si continúa en la guerra o si busca alguna fórmula de acercamiento con la guerrilla de las Farc” (*Revista Cambio*, junio 26 de 2006).

A mediados de 2006 parecía visualizarse un cierto giro en sus posiciones. ¿A qué obedecía el cambio de posición del Presidente Uribe respecto a las Farc?, ¿cómo explicar una posible apertura de las Farc ante la posibilidad de diálogos con el gobierno?

Por parte del gobierno, con los resultados electorales ampliamente favorables, más que un cambio en el discurso, y en su *Política de Seguridad Democrática*, cabría esperar lo contrario, es decir, que se reafirmara en su *posición dura* y mantuviera la apuesta por la derrota militar de las Farc, a la vez que avanzaba en el proceso con los grupos paramilitares y mantenía la expectativa de diálogo con el ELN.

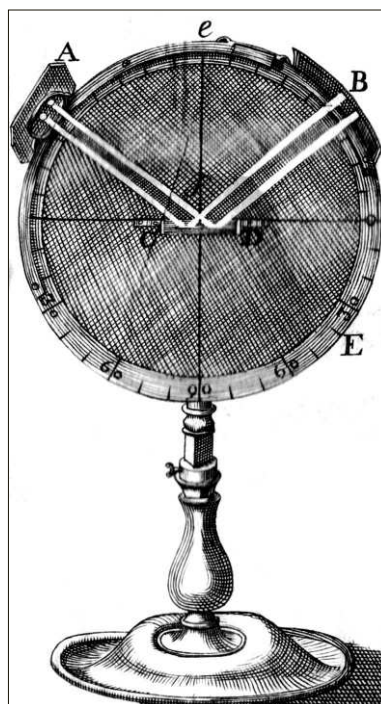
Un punto a tener en cuenta en este giro sería la hipotética situación de las Farc. No obstante algunos avances de la política de seguridad democrática, especialmente con la concreción de una mayor presencia de las fuerzas armadas del Estado en territorios en

los cuales las Farc habían tenido una fuerte presencia y que aparecen “recuperados” por el Estado, la perspectiva de una derrota del grupo guerrillero a corto plazo no parece ser muy viable.

Aunque se ha señalado el debilitamiento estratégico de las Farc en los últimos años, de acuerdo con lo cual sus acciones militares han disminuido y, en el balance frente a las fuerzas militares del Estado, salen perdiendo y, además, cuentan con un contexto internacional desfavorable dada su calificación como grupos terroristas por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos (Pizarro, 2005), mantienen aún su capacidad de acción militar que se expresa en su presencia y en sus actuaciones en diversas regiones del país, en sus acciones urbanas, en las frecuentes tomas de localidades, las bajas producidas a las fuerzas militares, las retenciones y secuestro de civiles; el mantenimiento de cientos de secuestrados sin que las fuerzas del Estado logren contrarrestarlo. De igual forma, ninguno de sus máximos dirigentes ha sido capturado y su Secretariado se mantiene intacto. En

este sentido, la vía militar de solución del conflicto no parece ser muy viable en el corto plazo, no obstante el fortalecimiento del Estado en cuanto a su capacidad de presencia y acción militar. Aun con su posible debilitamiento estratégico y el fortalecimiento del pie de fuerza de las fuerzas militares, el grupo guerrillero mantiene una importante capacidad de acción y aunque, como lo señala el gobierno, pudiera estarse dando un proceso de *lenta extinción*, la apuesta inicial por una derrota inminente del grupo guerrillero se estaría modificando.

Otro aspecto se refiere a los efectos del conflicto sobre la economía y sobre los



sectores económicamente dominantes de la sociedad. Como lo ha señalado Eduardo Pizarro (2005), por sus efectos sobre la economía, el conflicto afecta a las elites, que requieren condiciones de seguridad interna para su mejor inserción en la economía internacional, que se ven afectadas en su seguridad y que han sido convocadas por el mismo Estado con contribuciones tributarias destinadas a la seguridad. En tal sentido, éstas se expresan a favor de la resolución del conflicto mediante posibles negociaciones, a la vez que mantienen un explícito apoyo al gobierno y reivindican los avances de la *Política de Seguridad Democrática*.²⁷ Esta posición a favor de una solución negociada se viene presentando en los últimos años ante las evidencias de los costos económicos del conflicto, por lo que la persistencia de la violencia se analiza como el mayor obstáculo al desarrollo económico. Luego, la paz se hace “rentable” y “deseable” (Pecaut, 2000). En la medida en que se mantenga la expectativa de la *lenta extinción* se tendría que seguir asumiendo los costos del conflicto durante un tiempo probablemente largo.²⁸ Respecto al Estado, los efectos fiscales del aumento del gasto militar también implican hacer balances de mediano y largo plazo y, con ello, visualizar los impactos del sostenimiento de la política en las finanzas estatales. Especialmente, cuando una de las críticas centrales al primer cuatrienio del presidente Uribe Vélez ha sido el déficit en la inversión en programas sociales.

De igual forma, la presión de diversos sectores de la sociedad a favor del intercambio humanitario que, permita liberar a los cientos de secuestrados por parte de las Farc y que podría representar un paso a favor de posibles negociaciones con el grupo guerrillero, tam-

bién contribuyó a crear ciertas condiciones favorables a las modificaciones del discurso radical del gobierno.

En cuanto a las Farc, aunque han mantenido capacidad de acción con su presencia en localidades y municipios del país, el acceso a recursos de financiación, su posibilidad de afectar la infraestructura del país y ejercer la intimidación contra la población (en la lógica de “golpear y retirarse”), algunas condiciones derivadas de la dinámica del conflicto en la última década parecían incidir en la modificación de su *posición dura*.

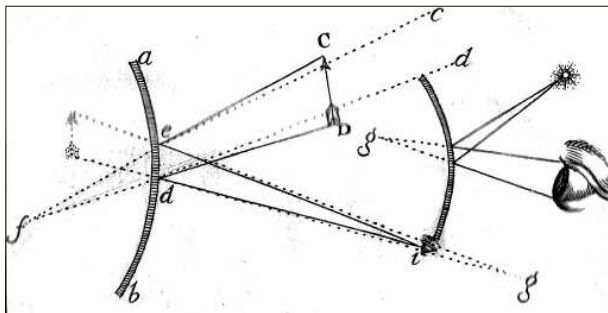
Así, luego de cuatro décadas de existencia, la opinión externa e interna sobre las Farc no parece ser muy positiva. Ha sido catalogada por Estados Unidos y por la Unión Europea como un grupo terrorista, e, internamente, diversos sectores han expresado el rechazo a sus acciones de guerra, sectores intelectuales que han simpatizado con la izquierda se han manifestado en el pasado reciente en contra de su orientación y sus formas de acción política y armada. Los dos éxitos sucesivos del candidato Álvaro Uribe Vélez expresarían, en parte, el rechazo de sectores mayoritarios del electorado a las acciones de guerra del grupo armado. Como lo ha señalado Daniel Pecaut (2005), las Farc, al privilegiar la estrategia militar sobre la política, han perdido espacios y apoyos o simpatías con que contaron en el pasado y su imagen ante la opinión pública se ha degradado. En esta dirección, en la perspectiva de ganar espacio y audiencia, recurrirían, como ya ha sucedido en el pasado, al discurso y a posibles acciones de paz intentando revalidar posiciones políticas e ideológicas.

Así mismo, las iniciativas de diálogo del ELN y el proceso de desmovilización y reinserción de diversos grupos insurgentes, desde finales de la década del ochenta, generaron la posibilidad de que el Estado contara con una mayor capacidad de acción contra un solo actor insurgente, que contra varios a la vez, como en el reciente pasado cuando llegaron a coexistir el M-19, el

afectará bienes y servicios suntuarios; 7. Política agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Protecciónismo estatal frente a la desigual competencia internacional. Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento de nuestras reservas; 8. Explotación de los recursos naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, etc., en beneficio del país y de sus regiones. Renegociación de los contratos con compañías multinacionales que sean lesivos para Colombia; 9. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio. Respeto a los compromisos políticos del Estado con otros Estados. Revisión total de los pactos militares y de la injerencia de las potencias en nuestros asuntos internos. Renegociación de la deuda externa; 10. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos (www.rebellion.org/noticia2005).

27. A manera de ilustración, podemos retomar dos planteamientos de representantes de gremios económicos del país. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) Luis Carlos Villegas planteó al respecto: “consideramos que el camino de la negociación política con las guerrillas y las autodefensas ilegales es la vía más idónea para terminar la violencia y poder así dedicar todas las energías de la nación a crear condiciones de vida dignas para todos los colombianos (2003).

28. Las estimaciones hechas calculan del 5% al 6% del PIB el costo del conflicto armado, incluyendo las apropiaciones de carácter presupuestal central. Según la Comisión de Racionalización del Gasto Público (CRGP), los costos económicos del conflicto armado equivalen a US \$3.200 millones (4% del PIB). De esta cifra, el costo directo para el gobierno se estima en cerca de 1,5%, y el costo indirecto para el sector privado es del otro 2,5%. Para la Comisión, esto es lo que no deja crecer la economía: son pérdidas. No incluye los costos de operación de los grupos paramilitares, de las empresas de vigilancia privada y los servicios de seguridad de las multinacionales, tanto de instalaciones y equipos, como de sus altos ejecutivos, que puede llegar a ser casi otro punto del PIB (ver al respecto Arias y Cajamarca, 2003). Otros estiman que, entre 1999-2003, los costos económicos del conflicto han representado 2.7 veces el déficit



Ejército Popular de Liberación, el Ejército de Liberación Nacional y las Farc. Un Estado con mayor pie de fuerza y enfrentado a un solo actor insurgente, tendría una mayor capacidad de acción en el futuro.

En un contexto en el cual la lucha contra el terrorismo a nivel internacional está al orden del día, en el que Estados Unidos y la Unión Europea las han incluido dentro de los grupos terroristas; con una imagen negativa ante amplios sectores de la población, con el pie de fuerza y con el presupuesto de las fuerzas armadas fortalecido, y con la posibilidad de ser el único movimiento insurgente activo ante el proceso de negociaciones iniciado con el ELN, las Farc, de igual forma que el gobierno, pueden encontrar motivos para modificar su posición dura y abrir puertas a una posible solución negociada del conflicto.

No obstante las aproximaciones iniciales y el aparente giro en las posiciones, los acercamientos no se concretaron. Las posiciones pos-electorales que parecían expresar posibles giros en los dos actores centrales del conflicto

han sido oscilantes, se han movido entre posiciones duras y aparentes acercamientos. No hay claridad respecto a las posibilidades del diálogo y de las negociaciones.

A manera de cierre

Un moderado optimismo respecto a las posiciones duras y al maximalismo

La *difícil combinación* que se ha presentado en Colombia, de elecciones periódicas y regulares, con un conflicto armado de varias décadas de existencia,

ha contado con un nuevo escenario a partir del cambio institucional que estableció la reelección presidencial y que condujo a la

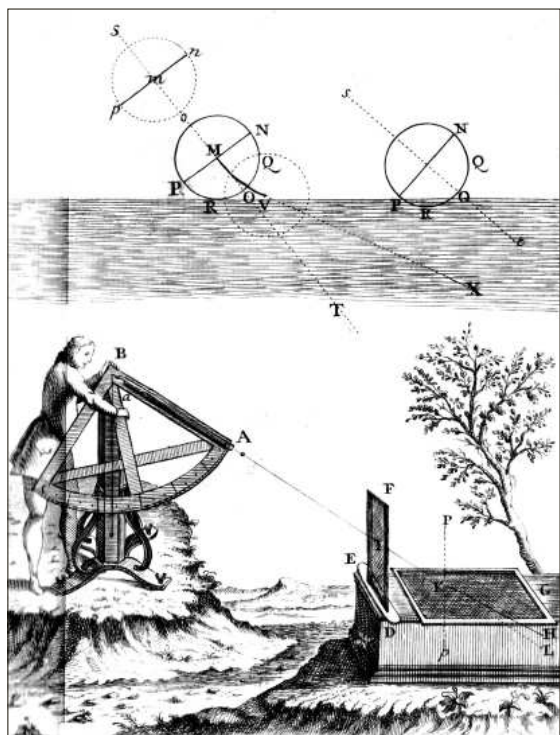
ley de justicia y paz como marco general de desmovilización y reinserción de los grupos paramilitares.

Bajo nuevas reglas de juego, y con un presidente reelecto, se ha configurado un nuevo escenario pos-electoral que parece tener ciertos contenidos nuevos. Así lo evidencian el giro expresado en las posiciones del presidente Álvaro Uribe Vélez y cierta apertura en los planteamientos de las Farc.

Podría plantearse un moderado optimismo respecto a una solución negociada del conflicto en un doble sentido. Por una parte, que efectivamente se esté gestando el paso de una *posición dura*, por parte del gobierno, sostenido en la estrategia de debilitar para persuadir y, con ello, de condicionar cualquier posibilidad de diálogo al cese al fuego o desmovilización, a una *posición moderada*, de solución política del conflicto. Esto implicaría una segunda recalificación de las Farc: de *grupos terroristas*, a insurgencia o delincuentes políticos (lo cual fue concedido, de hecho, a los grupos paramilitares). Así mismo, aun manteniendo la tesis de la *lenta extinción* por la cual estarían pasando las Farc, el Estado no parece estar en condiciones de apostarle, en el corto plazo, a la negociación frente a un grupo armado, no obstante, los avances obtenidos mediante la *Política de Seguridad Democrática*. Además, parece también poco probable la opción contraria, que las FARC logren acceder al poder político mediante la derrota del Estado.

Por otra parte, en el caso de que se esté generando un cambio en las Farc respecto al presidente Álvaro Uribe Vélez, en el reciente pasado calificado de *fascista* y *guerrillero*, queda el interrogante respecto a si el grupo guerrillero esté dispuesto a modificar sus posiciones maximalistas en torno a lo que esperan de un proceso de paz.

La persistencia del conflicto en Colombia durante varias décadas, con los intentos frustrados de negociaciones de paz entre el Estado y las Farc, y la imposibilidad de una derrota militar de alguna de las partes enfrentadas, ha sido denominada de diversas formas por los analistas políticos: *empate negativo*, *empate militar negativo*, *empate negativo*



del sector público en 2003, 7.4% del PIB de este mismo año y casi tres veces las reformas tributarias del gobierno de Uribe Vélez (Cuartillas de Economía No 23 2005, Departamento Nacional de Planeación).

catastrófico, paridad relativa en el poder. En todos estos adjetivos subyace la idea de un conflicto de larga duración, irresoluto y sin solución viable a corto plazo, con grandes efectos sobre la economía y la infraestructura del país, y con muchos sacrificios en vidas humanas.

En fin, en época pos-electoral, ambas partes parecían tener buenos motivos para la búsqueda de salidas negociadas al conflicto. Sin embargo, los buenos motivos no siempre conducen a buenas decisiones.

Bibliografía

- ARIAS, Paula Andrea y Cajamarca, Roberto. 2003. *El conflicto armado en Colombia: historia, costos e impactos económicos*, Bogotá, Universidad del Rosario.
- GALINDO, Carolina. 2004. *De la seguridad nacional, a la seguridad democrática: nuevos problemas y viejos esquemas*. Bogotá, Universidad del Rosario.
- GIRALDO RAMÍREZ, Jorge. 2004. *El nombre sí importa, el debate sobre la naturaleza actual de la guerra colombiana*, Medellín, Universidad de Antioquia.
- GUTIÉRREZ, Francisco. 2006. “Estrenando sistema de partidos”, en *Análisis Político* No 57, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional.
- GUZMÁN, Álvaro. 2004. “Seguridad, autoritarismo y negociación”, en Luis Carlos Castillo. Ed. : *Colombia a comienzos del nuevo milenio, VIII Coloquio Nacional de Sociología*, Cali, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle.
- PECAUT, Daniel. 2000 “*Colombia, una paz esquivada*”, *Revista Colombiana de Sociología*, Nueva serie Vol 5 (No 2). pp. 15-43 ISSN 0120-159.
- PEÑA, Rocío del Pilar y Quinche, Manuel Fernando. 2005. *Entrevista a Daniel Pecaute*. Documentos. Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, Bogotá.
- PIZARRO-LEÓN GÓMEZ, Eduardo. 1996. *Insurgencia sin revolución, la guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada*, Bogotá, Tercer Mundo Editores-IEPRI.
- _____. 2005.) *Una luz al final del túnel. Balance estratégico del conflicto armado en Colombia*, mimeo.
- PNUD 2005. *Hechos del Callejón*, Boletín No 5, Bogotá.
- VILLEGAS, Luis Carlos. 2003. *Los empresarios colombianos y el conflicto armado*. Palabras de presidente de la ANDI en la reunión de la ONG, Londres, julio 9.
- ZULUAGA NIETO, Jaime. 2006 “*El ELN y el gobierno nacional: por el camino de las negociaciones*”, *UN, Periódico de la Universidad Nacional*, Bogotá, No 86, enero 15.
- Documento: “*Carlos Gaviria presidente. Polo Democrático Alternativo. Construyamos democracia, no más desigualdad*”. 2005.

Fuentes hemerográficas

- Diario *El Tiempo*, mayo 8 del 2006.
- Diario *El Tiempo*, septiembre 7 del 2005.
- Diario *El Espectador*, marzo 26 del 2006.
- *Revista Cambio*, junio 26 del 2006.
- *Revista Diners*, mayo del 2006.
- *Cuartillas de Economía* No 23, 2005, Departamento Nacional de Planeación.